

**Cooperación internacional, desigualdad, organizaciones sociales y pandemia**

Dalida Edith Sandoval Fonseca  
Especialización en Finanzas Internacionales  
Corporación Universitaria Reformada

Barranquilla, Colombia

22 de jul. de 22

## Resumen

En el panorama económico de nuestro país, las organizaciones sociales dependen -en su gran mayoría- de la cooperación internacional. En concreto, dependen de los recursos que la cooperación internacional entrega a través de los proyectos de cooperación, que son presentados por estas organizaciones bajo las directrices de las agencias de cooperación.

La cooperación internacional para el desarrollo representa las iniciativas que adelanta la comunidad mundial para promover el desarrollo de los países socios, receptores de ayuda. La cooperación se fundamenta en la relación establecida entre 2 o más países, organizaciones internacionales u organizaciones de la sociedad civil; con el objetivo de alcanzar metas de desarrollo conjuntas, a través de la transferencia de tecnología, recursos humanos y financieros, conocimientos, habilidades y/o experiencias.

Los países de renta media, como Colombia, reciben cada vez menos ayuda -a medida que crece su economía- a pesar de contar con indicadores altos de desigualdad. En este escenario, el papel de las organizaciones sociales ha sido relevante por la autonomía que las organizaciones sociales tienen frente a los Estados. Esta autonomía encuentra sentido en cuanto las organizaciones dirigen sus esfuerzos a poblaciones específicas de interés. Esta investigación aborda un análisis del impacto de la Cooperación Internacional en las organizaciones sociales.

Esta investigación se elaboró teniendo como contexto una situación de crisis económica provocada por el aislamiento social obligatorio, decretado por las entidades gubernamentales como consecuencia de la pandemia por COVID-19. En el marco de la pandemia el sector terciario de la economía -y en especial las organizaciones sociales- se vieron grandemente afectadas. La mayoría de los recursos de las organizaciones provienen de cooperación internacional. Con ocasión de la pandemia los recursos se redestinaron, cambiando de propósito, extendiéndose en el tiempo los efectos de la crisis. A pesar de la reactivación económica, no se pronostica una recuperación completa y rápida, aunque las organizaciones sociales sirven de mediadores para recibir los ingresos para terceros y dar apoyo en la ayuda humanitaria de esta crisis sanitaria.

Durante esta realidad compleja, la cooperación y el acceso a estos recursos ha sido fundamental para garantizar la continuidad de este tipo de organizaciones sociales. Precisamente en esta realidad es que resulta necesario el análisis de la movilización de estos recursos para mitigar los impactos de esta crisis humanitaria generada por la pandemia y la supervivencia de las organizaciones sociales.

Es importante determinar el impacto que generó la pandemia sobre los recursos destinados para las organizaciones sociales, así como su reformulación para atraer a la cooperación hacia la inversión en otros temas diferentes a la pandemia, en Colombia.

La revisión de la literatura disponible y de artículos de organizaciones en la materia construye el hilo argumentativo de este trabajo.

## Abstract

In the economic panorama of our country, social organizations depend - for the most part - on international cooperation. Specifically, they depend on the resources that international cooperation delivers through cooperation projects, which are presented by these organizations under the guidelines of cooperation agencies.

International cooperation for development represents the initiatives undertaken by the world community to promote the development of partner countries, aid recipients. Cooperation is based on the relationship established between 2 or more countries, international organizations or civil society organizations; with the objective of achieving joint development goals, through the transfer of technology, human and financial resources, knowledge, skills and/or experiences.

Middle-income countries, such as Colombia, receive less and less aid -as their economies grow- despite having high inequality indicators. In this scenario, the role of social organizations has been relevant due to the autonomy that social organizations have vis-à-vis the States. This autonomy makes sense when organizations direct their efforts to specific populations of interest. This research addresses an analysis of the impact of International Cooperation on social organizations.

This research was elaborated in the context of a situation of economic crisis caused by the compulsory social isolation decreed by governmental entities as a consequence of the COVID-19 pandemic. In the context of the pandemic, the tertiary sector of the economy - and especially social organizations - were greatly affected. Most of the organizations' resources come from international cooperation. During the pandemic, resources were redirected, changing their purpose and extending the effects of the crisis over time. Despite the economic reactivation, a complete and rapid recovery is not foreseen, although social organizations serve as mediators to receive income for third parties and provide support in the humanitarian aid of this health crisis.

During this complex reality, cooperation and access to these resources has been fundamental to guarantee the continuity of this type of social organizations. It is precisely in this reality that it is necessary to analyze the mobilization of these resources to mitigate the impacts of this humanitarian crisis generated by the pandemic and the survival of social organizations.

It is important to determine the impact generated by the pandemic on the resources destined for social organizations, as well as their reformulation to attract cooperation to invest in other issues different from the pandemic in Colombia.

The review of the available literature and articles of organizations on the subject builds the argumentative thread of this work.

## **Introducción**

En este trabajo se abordan distintos aspectos de la cooperación internacional frente a la desigualdad, organizaciones sociales y pandemia. Para tal fin, se expondrán los conceptos relevantes y se hará una revisión bibliográfica de la temática vinculada a la desigualdad, la cooperación y las organizaciones sociales, en función a la evolución en Colombia. Todo lo anterior, con un especial énfasis en la emergencia sanitaria causada por la pandemia.

Para desarrollar este trabajo, se hará especial énfasis en una exploración de las razones de cómo como la pandemia del Covid-19 limitó los recursos de otras líneas de trabajo y redefinió la mayoría de los aportes de cooperación, destinándolos para la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo entero y especialmente Colombia. Finalmente se pretende reflexionar sobre aquellas temáticas que se destacan a lo largo de este ensayo.

## **Cooperación Internacional, desigualdad, organizaciones sociales y pandemia**

La desigualdad es una problemática de interés internacional, acentuada en Colombia como el segundo país más desigual de América del Sur, de acuerdo con el informe del Banco Mundial para el año 2021. En Colombia existen brechas económicas y sociales deplorables entre ciudades principales y aquellas marginadas por el conflicto armado y el abandono gubernamental (Portafolio, 2021). Esta panorámica pone al país en el ojo de la Cooperación Internacional, la cual en armonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el número diez: reducción de las desigualdades, se emplea como herramienta de solución.

Una situación imprevista y adversa como la pandemia exacerbó el problema y suscitó un cambio en los programas a ser intervenidos, dando prioridad, como es consecuente, a aquellos relacionados con la emergencia sanitaria y las consecuencias de la pandemia.

Conforme a los sucesos ocurridos durante los últimos dos años, quedó en evidencia que una pandemia no se encontraba registrada en ninguna matriz de riesgo de las organizaciones -ni públicas ni privadas-. De haberlo estado, la gestión de riesgo planificada quedó limitada ante las vertiginosas consecuencias que se presentaron en materia de salud, pero igualmente en las consecuencias económicas. La continuidad de muchos negocios quedó estancada ante la propagación del COVID-19 y las distintas medidas de restricción que se presentaron de manera obligatoria para dar un manejo adecuado y urgente, pretendiendo evitar secuelas mucho más catastróficas.

Nuestra cotidianidad como país quedó expuesta y muchos procesos de adaptación como personas y sociedad dieron entrada a nuevas concepciones ideológicas y tecnológicas, existiendo una paradoja entre los cierres fronterizos y el crecimiento de conexiones entre diferentes organizaciones en distintos lugares del mundo, centrando sus políticas principalmente en la búsqueda de soluciones al problema de salud que sobrevino como consecuencia de la pandemia. Las cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud, tan variables y alarmantes en cuestión de horas, nos generaban pánico e incertidumbre, era imposible prever tal dimensión, los efectos de esta crisis hicieron que surgieran ayudas internacionales con propósitos distintos a los tradicionales. No obstante, posterior a la reactivación económica, no se ha evidenciado una recuperación completa y rápida (Portafolio, 2021), por el contrario, dicha recuperación se ha prolongado en el tiempo con un proceso de adaptación en el que continuamos y en el que se despliegan afectaciones importantes de tipo económico, social y ambiental (APC Colombia, 2021).

En este contexto, el papel de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) adquiere una alta relevancia, siendo percibida como un instrumento esencial en la política de los países a través de la interacción de organismos de Gobierno y no estatales que aportan soluciones a las problemáticas que afectan a la humanidad tales como la pobreza, la desigualdad, la violación de derechos humanos, entre otros. La CID tiene el potencial de ser una fuerza transformadora para apoyar y guiar la recuperación económica sostenible a nivel global, después de un acontecimiento como la pandemia por COVID-19.

Es muy fácil, o al menos más sencillo, comprender en estos tiempos en que se entablan conversaciones basadas en principios de inclusión y en un lenguaje que expone a las personas como entes integrales y complejos, con un bienestar que incluye aspectos físicos, sociales y

psicológicos; que el desarrollo de un país no está dando únicamente por su crecimiento económico, sino que involucra diferentes aristas del ser humano.

No obstante, para declarar este paradigma la CID ha presentado cambios significativos en su concepción y en su aplicación a través del tiempo -en paralelo con el concepto de desarrollo- cuyo índice de medición ha tenido modificaciones acordes a los sucesos históricos y necesidades de la humanidad. En este orden de ideas, en épocas posteriores a la segunda guerra mundial la preocupación principal fue el desarrollo de los países industrializados en términos netamente económicos, considerando que un incremento del PIB per cápita reduciría la pobreza y aumentaría el bienestar global de la población (López, A. & Mendoza, L., 2020, pág. 23). En este sentido, el CID enfocó su análisis a una problemática de baja capacidad de ahorro y escasa inversión de los países, teniendo como índice para determinar el desarrollo el ingreso per cápita.

De esta forma, se dio el surgimiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Comité de Ayuda Oficial al Desarrollo (CAD) clasificando a los países de acuerdo con la renta: alta, media y baja. Un país con Ingreso per Cápita bajo se refiere a aquellos países que presentan entre 1005 o menos dólares estadounidenses por año (World Bank Data Team, 2017); los cuales son enlistados como países prioritarios en la recepción de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y reciben las donaciones y préstamos de la cooperación. Este listado se construye con base en el cálculo que considera el Producto Interno Bruto (PIB) dividido por la cantidad total de su población, con el fin de obtener el ingreso medio de los ciudadanos de un determinado país.

Por su parte, el Banco Mundial diferencia cuatro categorías de países: los de ingresos bajos, renta media baja, renta media alta y renta alta (López, A. & Mendoza, L., 2020, pág. 24).

Al evaluar el desarrollo dentro de este marco se tiene que, según el Banco Mundial, Colombia es un país de renta media alta y miembro oficial de la OCDE, siendo oferente y receptor, aunque recibe cada vez menos AOD a medida que su Ingreso per cápita crece, a pesar de contar con índice alto de desigualdad (López, A. & Mendoza, L., 2020, pág. 45).

En contraste, nuestro país aún tiene importantes pruebas que superar, como el ser uno de los más desiguales del mundo, el fenómeno migratorio, la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto, aspecto que se tratara más adelante, entre otros. Lo que se pretende en este apartado, es dejar entre ver que no se puede medir un desarrollo exclusivamente con una valoración económica, sino como un conjunto de condiciones que sitúan a la persona como el centro y sus requerimientos para vivir de un modo digno. Aparecen entonces otros dos indicadores para determinar el Desarrollo y la CID: el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Desarrollo Humano Ajustado por la Desigualdad (IDH-D). Cabe aclarar que estos índices no surgieron al mismo tiempo, el primero también evidenció progresos desiguales entre países, a pesar de tener en cuenta tres dimensiones: longevidad (esperanza de vida el nacer), nivel educacional (tasa de alfabetización de adultos combinada con la tasa bruta de matrícula) e Ingreso per Cápita (UNDP, 2018).

Sin embargo, no es posible equiparar las circunstancias entre países, no tienen las mismas falencias ni deben mejorar en la misma medida, el IDH por sí solo no permite medir de manera eficaz el desarrollo de un país ya que toma en cuenta únicamente los logros de un país y no cómo estos logros se distribuyen; de esta manera el IDH-D, al tener en cuenta las desigualdades, se convierte en el nivel real de desarrollo humano.

En síntesis, se resalta que CID es un apoyo para el desarrollo económico y social de un país frente a sus limitaciones, las cuales pueden ser corregidas a través de transferencia de

conocimiento, tecnología, recursos, asistencias, etc., y no dirigidas solamente a aportar al crecimiento económico; por tal motivo, el uso de indicadores socioeconómicos como el Ingreso per Cápita, el IDH y el IDH-D, resultan de vital soporte para definir los sectores en los que la ayuda proveniente de la cooperación es más necesaria, y como expuso Álvarez (2012) el crecimiento económico se convirtió en un medio para medir el desarrollo y no en un fin.

En cuanto al impacto de la pandemia sobre la Cooperación Internacional, se provoca un cambio en su visión general y la necesidad de repensar su alineación en torno al concepto de bienes públicos globales, sin dejar de lado las prioridades de cada país. Con un enfoque transfronterizo en temas transversales como el mantenimiento de la paz y seguridad mundial, asociaciones de entornos regionales, prevenir crisis de salud como la actual y la atenuación del cambio climático.

Por otra parte, retomemos el contexto colombiano y sus estadísticas de desigualdad que lo catalogan como el segundo país más desigual entre los 18 países de América Latina, situación que se acrecentó con el impacto económico del COVID-19, pero que tiene sus orígenes con el mal manejo político de los últimos 70 años (Portafolio, 2021). Los conflictos armados prolongados, el olvido de los territorios víctimas de estas guerras y sobre todo de la corrupción han contribuido a la consolidación de esta nada honrosa posición. De acuerdo con el Banco Mundial (2021) los ingresos del 10% de la población más rica de los colombianos es once veces mayor que el 10% más pobre, igualmente menciona en su informe que la pandemia empeoró aún más la desigualdad y llevó a alrededor de 3,6 millones de personas a la pobreza.

En mi opinión, los Gobiernos han permitido el desvío de los recursos sin ninguna secuela judicial o con condenas demasiado dúctiles que estimulan que la corrupción y que el flujo ilícito de capital se siga propagando, basta con dar una mirada a territorios como la Guajira con falta de recursos hídricos, exigua conectividad a redes de internet, bajos niveles de educación y altísimos

de desnutrición infantil para comprobar que la implementación de las estrategias de desarrollo no están siendo ejecutadas eficientemente. En Colombia, la atención a la pandemia demostró una vez más los graves riesgos de corrupción que sigue enfrentado el país en materia de contratación pública (Transparencia por Colombia, 2021).

Lo anterior queda en evidencia con el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de Transparencia Internacional, que arrojó para Colombia una calificación de 39 puntos sobre 100, donde cero significa corrupción muy elevada y 100 ausencia de corrupción. Entre los países que hacen parte de la OCDE, Colombia ocupa el penúltimo puesto entre 37 países, superando únicamente a México (Transparencia por Colombia, 2021).

Así mismo, la debilidad institucional y los fenómenos de violencia en algunos sectores, por ejemplo, la Amazonia, le han restado valor al crecimiento del campo con acciones poco coordinadas que no permiten una calidad de vida creciente en el marco de un desarrollo sostenido y ambientalmente sostenible.

Los estragos de conflictos armados, que tienen raíces profundas, exponen disputas por el control territorial y el aprovechamiento de sus riquezas. Las zonas atravesadas por la violencia y la resistencia de sus pobladores frente a grupos al margen de la ley como las ya desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y otras vigentes como el Ejército de Liberación Nacional (ELN); aunque todas con soluciones inconclusas, con cultivos de coca ilícitos que continúan siendo un atractivo estratégico, económico y militar. Sus inicios no parecen diferenciarse de la actualidad con reparticiones desiguales que dieron cabida al uso de la lucha armada por el poder, argumentado como el único método de defensa. La consolidación del actual proceso de paz es un reto que también ha sido afligido por la corrupción y mal manejo de los programas, con trabas en muchos de sus procesos por el mismo

hecho del ego de poderes, esta vez de carácter político, que buscan comprobar quien tiene más control, dejando al lado a las víctimas, sus territorios y derechos.

Es claro que la distribución de los beneficios del crecimiento que cataloga a Colombia como un país de renta media alta presenta un sesgo concentrado en manos de unos pocos ampliando la desigualdad.

Otra área que refleja el mal tratamiento de los recursos es el acceso desigual a la salud, con entidades que se toman un café para conversar, mientras los usuarios sufren problemas críticos de salud que no son atendidos oportunamente, la privatización de este servicio ubica en la mente de los ciudadanos la premisa clara de que se requiere poseer dinero para adquirir una “buena” salud contribuyendo a la violación de derechos humanos fundamentales, de manera similar sucede con la educación superior que parece estar restringida para los de escasos recursos; la separación de clases sociales es una causa que tiene un legado colonial que ha sido arraigada en la sociedad colombiana, con una élite que se beneficia de los mejores bienes públicos y del acceso al poder político, teniendo las mejores oportunidades y con una buena parte de la población excluida.

El informe del Banco Mundial (2021) indica que las desigualdades en Colombia inician desde la infancia de manera que tiene consecuencias en la acumulación de capital humano que a su vez impactan en las oportunidades al momento de ingresar al mercado laboral u obtener ingresos; algunos datos permiten razonar que la situación en Colombia trasciende de un plano económico, como por ejemplo que un niño pobre recibe dos años y medio menos de aprendizaje que uno rico, el 93% de los individuos cuyas madres tienen educación superior logran alcanzar ese nivel educativo frente al 19% de los individuos cuya madre tiene únicamente educación primaria logran una educación superior o que ha Colombia le tomaría por lo menos tres décadas y media para alcanzar el nivel promedio de desigualdad de los países de la OCDE.

Su principal desafío está relacionado a la movilidad social entre generaciones, las cifras anteriores señalan que las condiciones de vida de los padres impactan en los niveles de desigualdad de sus hijos, con elementos como la persistencia de ingresos y de educación a lo largo de las generaciones.

Además de la desigualdad en ingresos y educación, hay otras esferas sociales que inciden en la desigualdad y afectan grupos específicos. Las tasas de pobreza son significativamente más altas en los hogares rurales, de migrantes, indígenas y afro descendiente:

Un colombiano nacido en Chocó tiene cinco veces más probabilidades de nacer en la pobreza que uno nacido en Bogotá. Una mujer tiene 1,7 veces más probabilidades de estar desempleada que un hombre. Un colombiano indígena alcanza en promedio dos años menos de escolaridad que uno no indígena (Portafolio, 2021).

La pandemia afecta con mayor severidad a las familias con menores ingresos o con prevalencia de desigualdad.

Otro ingrediente que se une a la receta son los flujos migratorios provenientes de Venezuela, los cuales han impactado todo el territorio nacional, especialmente las fronteras, originando problemáticas públicas para propios y extranjeros, que si no son gestionadas adecuadamente dan lugar a crisis de oportunidad laboral, de saneamiento y de abastecimiento más críticas que las existentes.

Dentro de todo este panorama de la desigualdad en Colombia se encuentran las Organizaciones Sociales, entendidas como aquellas entidades sin ánimo de lucro y las Organizaciones de la Sociedad Civil, que se caracterizan por movilizar recursos alrededor de valores compartidos; que han comprendido la desigualdad como un problema político antes que

un desafío técnico, el cual surge como resultado de la exclusión social, de la desigualdad estructural y del subdesarrollo. En relación al CID estas organizaciones han tenido gran relevancia por su carácter social, sus decisiones basadas en sus propios parámetros, fuera de la dependencia gubernamental, proyectando sus objetivos sin interés económico, promocionando estrategias de educación, asistencia humanitaria, presión política, proyectos de innovación, erradicación de la pobreza, entre otras.

Este tipo de entidades han aportado a nuestro país en aspectos como el conflicto armado, proyectos relacionados con COVID-19, migración y proyectos ambientales, permitiendo la continuidad de los programas de desarrollo locales, aún en época de pandemia, dado que como se ha venido mencionando a lo largo del texto, para solucionar problemas como la desigualdad y sus implicaciones, es necesario tener una visión que abarque no solamente el componente económico, sino las demás variables de carácter social, como la salud, la educación y las condiciones de vida, tal como lo hacen organismos autónomos, las organizaciones de la comunidad civil, las ONG, las universidades, entre otros.

El año 2020, de manera sorprendente, representó el año con mayor Cooperación Internacional para Colombia, registrando con una cifra de cooperación no reembolsable de USD 1.071.659.948, la mayor en los últimos diez años (APC Colombia, 2021, pág. 8), lo que demuestra la importancia de unificar esfuerzos entre distintos actores de cooperación para transformar crisis mundiales, como lo es una pandemia, en oportunidades de desarrollo a nivel global y local.

Es así, como una de las principales características que deben tener las organizaciones sociales es la resiliencia, tan necesaria en un momento como el experimentado, donde las desigualdades entre la población incrementaron, arriesgando el cumplimiento de los ODS al término del 2030.

Teniendo una diversidad de cooperantes con diferentes proyectos, lo que refleja el alcance e interés de los diferentes actores en una variedad de temas y territorios en Colombia.

No obstante, los principales recursos, como ha de esperarse ante la emergencia, fueron destinados a temas de pandemia con 46 actores privados incluyendo filantropía y siete ciudades y/o entidades territoriales de otros países, con un aumento del 22% de los recursos comparado con el año 2019. Es importante mencionar, que el mayor porcentaje de Cooperación Internacional se dio por cooperación bilateral, la cual es de tipo gubernamental y se refiere a la ayuda entre Estados; seguido de la cooperación multilateral, igualmente gubernamental con gestión de los fondos a cargo de las instituciones internacionales (APC Colombia, 2021, pág.22). Esto evidencia un grupo diverso de cooperantes que a su vez refleja el grado de heterogeneidad que ha alcanzado la cooperación en el país.

Las intervenciones del sector privado corresponden a donaciones de mercados, elementos de protección personal e insumos médicos como ventiladores respiratorios y pruebas rápidas para detección del Sars-Cov-2. Igualmente, para gestionar oportunamente los recursos se activó en el país Comisión Técnica Nacional Asesora para la Gestión de la Cooperación Internacional en el manejo de desastres.

Por medio de cuatro modalidades de cooperación se sumaron USD 194.575.017 dirigidos a mitigar los efectos de la pandemia. Este valor incluye donaciones de emergencia, programas humanitarios, recursos re-direccionados y/o adicionales de proyectos aprobados o en ejecución (APC Colombia, 2021, pág. 37). Si bien la mayor inversión se dio por parte de la cooperación bilateral, en cuanto a movilización y ejecución las Organizaciones Sociales adquieren

protagonismo al implementar gran parte de estos recursos, equilibrando su participación casi en un 50% respecto a los socios de cooperación gubernamental (APC Colombia, 2021, pág. 38).

En retrospectiva, se destaca una flexibilidad y adaptabilidad de la CID, la cual generó nuevas estrategias de planificación movilizando aportes de gran magnitud a países con brechas de desigualdad como lo es Colombia, emergiendo en el mapa países no tradicionales en la AOD como Turquía, Israel, Vietnam y China, quienes hicieron importantes donaciones en especie (APC Colombia, 2021, pág. 41).

En cierta medida, la pandemia ha detenido diferentes ámbitos del desarrollo como la economía, el empleo, la educación, la seguridad alimentaria y afectado las condiciones de vida de poblaciones vulnerables como migrantes, comunidades negras, afrocolombianas e indígenas. La pérdida de empleos afectó en primera medida al sector informal y comercio del que dependen los ingresos de un gran número de migrantes.

El confinamiento y sucesivas restricciones de movilidad perjudicaron el acceso a medios de vida de poblaciones en zonas rurales y propiciaron el aumento de casos de violencia basada en género y maltrato a menores. Por tanto, las primeras intervenciones de la cooperación internacional se destinaron a atender las necesidades básicas de la población más afectada y en adaptar las actividades a las condiciones epidemiológicas y de bioseguridad requeridas para evitar el contagio. Esto explica una mayor asignación de recursos en asistencia humanitaria, lo cual fue una tendencia a nivel global, así como los esfuerzos pagados para el fortalecimiento de los sistemas de salud y la investigación científica, enfocados, en el intercambio de conocimiento.

Sin embargo, otros temas de interés para el país, también recibieron aportes, concentrando en tres líneas principales. En primera instancia, se encuentra la estabilización territorial que pretende

transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren los municipios afectados.

En el 2020 el 18,28% de los recursos de cooperación internacional no reembolsable se destinaron a esta causa, como aporte al cumplimiento del Acuerdo Final y al impacto positivo en las comunidades (APC Colombia, 2021, pág. 91). Las zonas con mayores recursos son Catatumbo, Putumayo y Alto Patía-Norte del Cauca; para la primera los principales aportes de financiación provienen de fundaciones privadas internacionales. En Putumayo se destacan el fortalecimiento de la economía agrícola y el mejoramiento de la infraestructura vial vinculada a las cadenas productivas láctea y cacaofera. Para el caso de Alto Patía-Norte del Cauca La filantropía internacional tiene una especial relevancia al aportar el 22,53% de los recursos para la sustitución de cultivos (APC Colombia, 2021, pág. 93).

En segunda instancia, se encuentra el fenómeno migratorio, que resulta cada vez más relevante para los cooperantes internacionales en Colombia, al ser el país principal receptor y territorio de tránsito de migrantes venezolanos y colombianos retornados. Las zonas con gran afluencia de migrantes son Norte de Santander, La Guajira, Arauca, Nariño y Atlántico, en los cuales se ha iniciado proyectos de asistencia alimentaria y mitigación de los efectos del COVID-19 para esta población. Igualmente, se tiene una Unidad interinstitucional de cooperación internacional para la migración proveniente de Venezuela responsable de controlar la alineación de la cooperación internacional con respecto a las prioridades nacionales y de articular las intervenciones.

Por último, se encuentra la línea de conservación y sostenibilidad ambiental, en el que se destacan proyectos como ProBosques en el Meta y Caquetá y REDD Early Movers en Meta, Caquetá y Putumayo; los cuales reciben la mayor cantidad de recursos en esta línea. También se

tienen proyectos en ciudades como Bogotá y Medellín que apuntan hacia la innovación y la articulación de nuevas tecnologías en un plan de energía híbrida y la reducción de emisiones en vehículos comerciales antiguos (APC Colombia, 2021, pág. 76).

El 50,41% de los recursos son aportes generales a la línea prioritaria y el 39,33% a las sublíneas, se evidencia entonces un abordaje multisectorial al tener este tipo de proyectos muy relacionado con el ambiente y desarrollo sostenible, pero también a los sectores de transporte, minas y energía, vivienda, ciudad y territorio como forma de atención de los desafíos de conservación y sostenibilidad ambiental (APC Colombia, 2021, pág. 76).

Finalmente, se menciona que dentro de la cooperación internacional para Colombia existe un componente esencial si se desea un desarrollo real y perdurable del país, me refiero a la consolidación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, sin embargo, los aportes para este aspecto en el año 2020 no llegaron al 5% de la CID, con un 2,45% de los recursos recibidos (APC Colombia, 2021, pág. 81).

Lo anterior pone en manifiesto la necesidad de generar estrategias de planificación que capten mayores recursos de la CID, adicionales a los recibidos por países como Estados Unidos, principal cooperante y suscita un reto para las Organizaciones Sociales para tener un rol más importante en la consecución del Acuerdo Final y el compromiso de fuentes no oficiales en contribuir a iniciativas de construcción de paz en Colombia.

## **Conclusiones**

La realización del presente ensayo fue una experiencia enriquecedora, donde me aportó muchos conocimientos sobre aquellas cuestiones que se desconocía en cooperación y de forma general y como conclusión se comprueba que la pandemia limitó la cooperación internacional en temas distintos a la solución de la emergencia sanitaria, sin embargo, también se aumentaron los aportes generados por CID partiendo de la misma premisa de resolver el escenario presentado, dando una vez más cátedra de que la Cooperación Internacional es clave para la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario.

Igualmente se resalta que Colombia ha sido un país que, a pesar del crecimiento de indicadores socioeconómicos, enfrenta problemas estructurales como la inequidad, la extrema pobreza de algunos sectores de la población y la resolución de un conflicto armado de más de 60 años; enfrentando diversos desafíos sociales, económicos e institucionales, obligando a los demás sectores distintos a la salud a reformularse para mantener los recursos de la cooperación. Sin dejar de lado la responsabilidad del Estado en la adecuación de sus capacidades para responder a esta nueva normalidad.

Por último, es necesario comprender como colectivo que el desarrollo no puede ser medido en términos netamente monetarios, sino desde la perspectiva filantrópica priorizando temas sociales y ambientales por encima de las utilidades financieras para contribuir con una mejor sociedad.

## Referencias

- APC – Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (2021). Análisis del comportamiento de la cooperación internacional no reembolsable recibida por Colombia en el año 2020. Colombia. <https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/2021-07/Analisis%20Demanda%20pagina.pdf>
- Álvarez, S. (2012). *Una introducción a la Cooperación Internacional para el Desarrollo*. La Rioja, España. Revista electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja, (10), 285-309. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4104832>
- Banco Mundial. (2021). *Informe Anual 2021 De la crisis a la recuperación verde, resiliente e inclusiva*. Grupo Banco Mundial. <https://www.bancomundial.org/es/about/annual-report#anchor-annual>
- Transparencia por Colombia (2021). Comunicado de Prensa 001-2021. (2021). Colombia no logra avances significativos en percepción de corrupción. Transparencia por Colombia. <https://transparenciacolombia.org.co/2021/01/28/colombia-no-logra-avances-significativos-en-percepcion-de-corrupcion/>
- López, A. & Mendoza, L. (2020). *Cooperación internacional al desarrollo no gubernamental: estudio de caso ONG Manos Unidas en Colombia 2011-2013*. Bogotá, Colombia. Universidad de la Salle. [https://ciencia.lasalle.edu.co/negocios\\_relaciones/208](https://ciencia.lasalle.edu.co/negocios_relaciones/208)

Naciones Unidas. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030*.

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

Pfeiffer, C., & Giraldo, F. (2003). *Estudio de Antecedentes Organizaciones No Gubernamentales, regulación, control y vigilancia*. Bogotá. Comisión Segunda del Senado de la República.

Portafolio. (2021). *Colombia el segundo país más desigual en América Latina*. Colombia.

Diario Portafolio. <https://www.portafolio.co/economia/gobierno/colombia-es-el-segundo-pais-mas-desigual-de-america-latina-segun-el-banco-mundial-557830>

World Bank Data Team. (2017). *Nuevas clasificaciones de los países según su nivel de ingreso: 2017-18*. Madrid, España. World Bank Data Team.

[https://blogs.worldbank.org/es/opendata/nuevas-clasificaciones-de-los-pa-ses-seg-n-su-nivel-de-ingreso-2017-18?fbclid=IwAR0z64o9JDQqdfKMcyWOyp97LtNYrOiIzW6qQx\\_zYmJ0Uj3WdRmU1AH3DDg](https://blogs.worldbank.org/es/opendata/nuevas-clasificaciones-de-los-pa-ses-seg-n-su-nivel-de-ingreso-2017-18?fbclid=IwAR0z64o9JDQqdfKMcyWOyp97LtNYrOiIzW6qQx_zYmJ0Uj3WdRmU1AH3DDg)

United Nations Development Programme - UNDP. (2018) *Human development indices and indicators: 2018 Statistical update*.

[http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018\\_human\\_development\\_statistical\\_update.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf)